

Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica: **Territorios y actores en la encrucijada**

VERSIÓN RESUMEN

Centroamérica vive en la actualidad un contexto de múltiples crisis, muy lejos del optimismo que se vivió en la década de los noventa respecto a la protección de los derechos humanos y la expansión de oportunidades para la expresión y participación social y política. El actual contexto de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho amenaza los derechos civiles y políticos ganados en las décadas anteriores, y también tensiona y golpea a las comunidades locales, pueblos originarios y afrodescendientes, **quienes se encuentran en “primera línea” defendiendo alternativas de convivencia** que resultan fundamentales para mantener la esperanza en un futuro más democrático, inclusivo y sustentable.

La construcción de ese futuro requiere de actores territoriales fortalecidos en sus derechos políticos y civiles, socioeconómicos, culturales, territoriales y de autodeterminación. Esto pasa por reconocer la existencia de numerosas experiencias de gobernanza local y territorial que logran alcanzar, simultáneamente, objetivos de seguridad alimentaria, diversificación de las economías locales, la cohesión social y la protección y recuperación de recursos naturales y de servicios ecosistémicos. Estos actores locales y territoriales tienen también un rol clave en la identidad, la vida institucional y la gobernanza de los territorios.

Sin embargo, una serie de tendencias ponen hoy en peligro dichas experiencias de gobernanza en la región, entre las cuales está un **persistente interés por explotar los recursos naturales y los territorios rurales** en un contexto de alta vulnerabilidad ante el cambio climático y donde se han consolidado mecanismos de control territorial por parte de actores de la economía ilícita. También se evidencia un fuerte **proceso de debilitamiento del Estado de derecho**, pero también de los espacios de participación, y con esto el surgimiento de formas más opresivas de ejercer el poder. Para enfrentar esta nueva ola de amenazas, ha sido necesaria una **reconfiguración y evolución de las diversas expresiones de organización** tanto de los actores territoriales como de otros sectores de la sociedad civil y movimientos sociales.

Este documento resume los principales análisis del Informe **“Tendencias Regionales y Gobernanza en Centroamérica: Territorios y actores en la Encrucijada”**. Su contenido es un insumo para la reflexión colectiva desde la sociedad civil, que contribuye a un mejor entendimiento del complejo contexto por el que atraviesa Centroamérica.

Este resumen está organizado en tres secciones: primero, se plantea una lectura regional sobre una serie de tendencias que ponen en peligro las experiencias de gobernanza de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes de la región. La segunda sección vuelca la mirada hacia un mosaico de territorios rurales de Centroamérica que ejemplifican cómo se concretan estas tendencias, haciendo énfasis en las implicaciones que representan estas dinámicas para la gobernanza territorial. La última sección plantea posibles respuestas para promover nuevas y mejores colaboraciones estratégicas en diferentes ámbitos de trabajo de la sociedad civil, en función del fortalecimiento de los actores territoriales inmersos en estos contextos, y de sus agendas orientadas hacia la construcción de una gobernanza territorial democrática, inclusiva y sustentable.



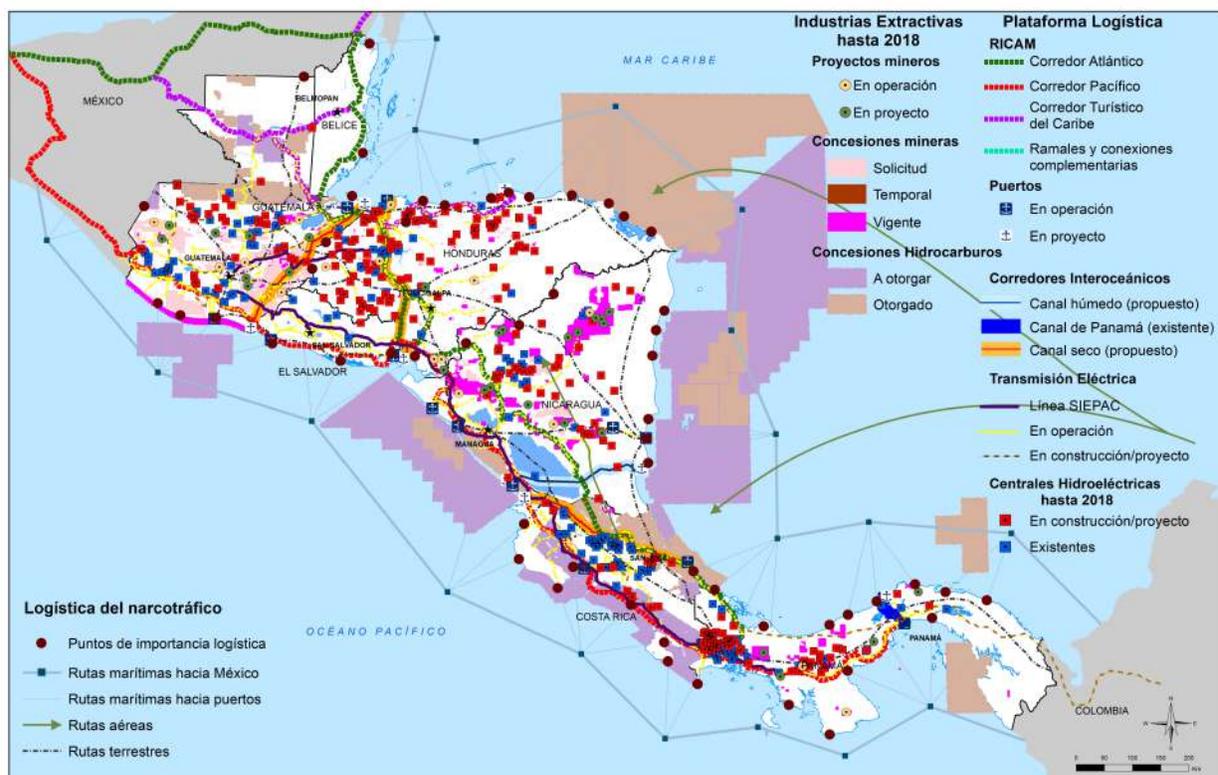
Tendencias regionales: Territorios y actores en la encrucijada

La década de los noventa trajo una serie de cambios que alimentaron una sensación de optimismo para el futuro de la región centroamericana, al poner fin a largas guerras internas y avanzar en la construcción de nuevos procesos de democratización. El énfasis fue puesto en los derechos políticos dejando en segundo plano los de desarrollo, en un momento en que la reconstrucción de la posguerra demandaba atender cuestiones claves en materia de educación, vivienda, salud, y de forma paralela, la construcción de una cultura de paz.

En la actualidad, Centroamérica vive una situación muy diferente. Tres tendencias definen un contexto de complejidad creciente y ante el cual resulta necesario reconstruir la esperanza:

- Un mayor interés por la **explotación comercial de los recursos naturales** de los territorios rurales en Centroamérica
- La erosión del **Estado de Derecho, participación y el ejercicio del poder**
- La **evolución de los actores territoriales, movimientos sociales y sociedad civil**

Centroamérica: Industrias extractivas, plataforma logística y corredores ilícitos del narcotráfico

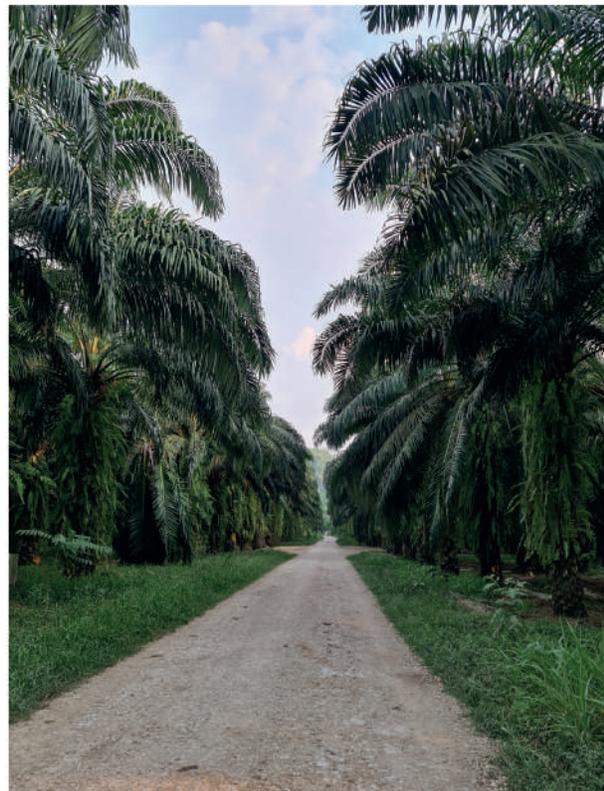


Fuente: Elaboración propia según Geocomunes (2018) y Ventura (2014)

Mayor interés por la explotación comercial de los recursos naturales de los territorios rurales en Centroamérica

Desde los años 90 se facilitó una serie de inversiones de carácter extractivo que ahora están siendo reforzadas y que profundizan patrones históricos de exclusión, vulnerabilidad y degradación ambiental. Estas dinámicas son exacerbadas por el despliegue de actores ilícitos que ejercen estrategias de control del territorio basadas en la violencia, las cuales repercuten en una mayor conflictividad socioambiental y en los medios de vida de las comunidades locales. La crisis global provocada por la pandemia de COVID-19 ha intensificado estas tendencias, obligando a los gobiernos a contraer un mayor endeudamiento, pero también a intensificar sectores económicos basados en recursos naturales como fuentes de divisas y de ingresos fiscales.

Entre esas estrategias de inversión se destaca la **expansión de la agroindustria** alrededor de cultivos de alta rentabilidad como la palma africana o la caña de azúcar, respaldada por su potencial uso como fuentes de energía, pero en detrimento de una agenda comprometida con la seguridad y soberanía alimentaria. Se observa también una nueva **extracción minera y de hidrocarburos a gran escala**, que implica una explotación indiscriminada de los recursos naturales con objetivos exportadores. Las presiones internas y externas para desregular la economía se acompañan de rasgos distintivos: el acaparamiento de tierras, la competencia por el recurso hídrico y su contaminación, la militarización de los territorios y la criminalización de la protesta social.



Otra apuesta ha sido el **desarrollo de infraestructura de transporte y energía** para convertir a la región en una plataforma logística para los servicios, el comercio y el turismo, dinámica promovida por grupos económicos nacionales y regionales que se materializa en diferentes megaproyectos. Esto replantea el rol de territorios rurales que tradicionalmente no habían sido considerados dentro de las principales estrategias de acumulación.

En ese contexto, Centroamérica también debe afrontar los **desafíos del cambio climático** que tiene múltiples expresiones: por un lado, severas sequías - particularmente en el Corredor Seco Centroamericano- y por otro, lluvias excesivas, huracanes y el aumento del nivel del mar, fenómenos que generan importantes pérdidas para la región, sobre todo para la población más vulnerable. La región adolece de estrategias contundentes de adaptación que tomen en cuenta los factores de vulnerabilidad. Por el contrario, se redoblan esfuerzos en estrategias de mitigación que no consideran las dinámicas de exclusión, degradación y conflictividad socioambiental de los territorios. Por su parte, el sector privado ofrece respuestas heterogéneas y contradictorias: omiten criterios de sustentabilidad o los retoman como áreas de oportunidad para la diversificación económica en áreas problemáticas como la energía hidroeléctrica o los biocombustibles.

Mientras tanto, el **control territorial por parte de actores ilícitos** se expande. La región se ha consolidado como un corredor para actividades ilícitas: narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, etc., actividades que transforman los territorios. Los recursos obtenidos de ellas permiten incrementar las inversiones, tanto lícitas como ilícitas, y ejercer control sobre otros territorios a partir de nuevas relaciones políticas y empresariales, sembrando en la región un clima de inseguridad, violencia e impunidad.

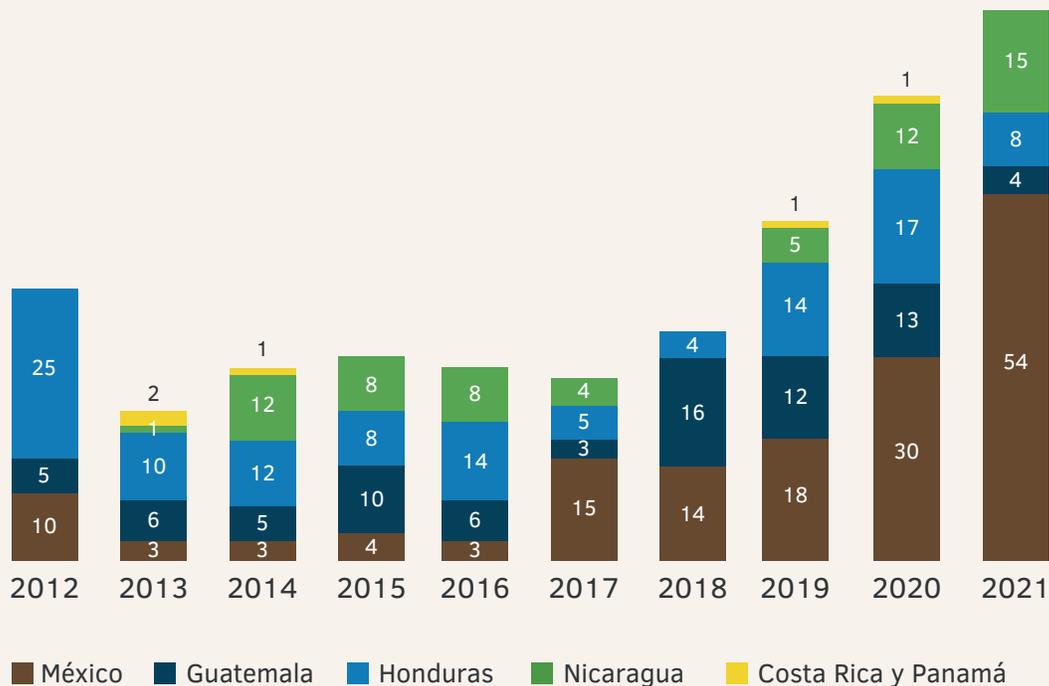
Estado de derecho, participación y ejercicio del poder

Con el fin de los conflictos armados en la década de los 90, los discursos se volcaron hacia la defensa de derechos y, formalmente, se vio una expansión de los derechos territoriales en algunos países de la región. Sin embargo, este cambio no fue acompañado por la voluntad de los Estados de hacer cumplir la normativa que estaba siendo adoptada. En la actualidad emergen **normativas tendientes a la restricción, obstaculización, control o represión** de diversas formas de organización social y comunitaria, con las excepciones de Costa Rica y Panamá, países que no dejan de experimentar niveles crecientes de desigualdad, así como la deslegitimación de sus instituciones.

El principal factor detrás de estas tendencias es el tipo de influencia que ejercen sobre el Estado las élites económicas, cuyos intereses se entretajan con los de capitales regionales y transnacionales. Junto a ellos, se erigen los ahora fortalecidos actores ilícitos que aprovechan la cultura patrimonialista con la cual operan los Estados de la región para establecer sus propios vínculos con estos, incluso en las más altas esferas políticas.

La captura del Estado tiene diferentes expresiones. Los partidos políticos organizados en torno a ideologías pierden relevancia y se propicia la aparición de movimientos políticos donde la figura del caudillo carismático tiene más importancia que las ideas o los programas políticos. Por otra parte, escándalos como los *Panama Papers* ponen al descubierto los mecanismos usados por las élites para evadir impuestos y lavar dinero.

Defensores ambientales y territoriales asesinados en países de Mesoamérica (2012 - 2021)



Fuente: Elaboración propia con base en información de Global Witness

Todo esto tiene implicaciones graves para la legitimidad y la representatividad de los sistemas políticos de la región, en tanto se perciben las instituciones como herramientas para el ejercicio del poder. Frente a ello, el Estado y los poderes fácticos abordan la conflictividad social y territorial con violencia y represión, atacando las expresiones de diversidad y cerrando los espacios y mecanismos de participación ciudadana.

A pesar de diversos intentos formales de avanzar hacia una cultura de paz, la violencia no ha dejado de ser un mecanismo de control. Desde el Estado se normaliza la militarización de la seguridad civil y junto a la violencia coercitiva, se observa el despliegue de nuevas formas de control social más sofisticadas, valiéndose de las comunicaciones y las redes sociales para generar y propagar información falsa, y así influir en la opinión y los resultados electorales; pero también para el espionaje de opositores, activistas y periodistas.

Esta tendencia hacia la deslegitimación de las instituciones también se ve a nivel internacional, donde organismos como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos pierden capacidad de influencia, afectando las posibilidades de incidencia de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos territoriales y comunales. **Estos contextos de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho tensionan y golpean los sistemas de gobernanza territorial, perdiéndose capacidades clave para sustentar medios de vida y prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales.**

Como respuesta extrema a estas dinámicas, la migración se presenta como una forma de supervivencia y una estrategia para buscar mejores condiciones de vida.

El impacto en la gobernanza territorial se refleja a partir de dos fenómenos recientes:

- La emigración masiva de personas que dejan sus países y la región
- La transformación de Mesoamérica en un corredor de tránsito migratorio

En el Triángulo Norte de Centroamérica ocurre un verdadero éxodo de poblaciones que emprenden el viaje hacia Estados Unidos, empujadas por el clima de inseguridad, violencia e impunidad instaurado en la región, además del colapso de los medios de vida rurales, provocado por la intensa degradación ambiental y los impactos del cambio climático. Esto deja a las organizaciones territoriales sin fuerzas vivas para desarrollar actividades de subsistencia, productivas y de defensa territorial. Este “vaciamiento” es aprovechado por otros actores que promueven el extractivismo, degradando aún más la cantidad y calidad de los recursos naturales de la región.

Mesoamérica se ha convertido en un corredor de tránsito de poblaciones que huyen de múltiples escenarios de crisis social en búsqueda de un mejor futuro en Estados Unidos. Aquí convergen principalmente personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Ecuador, pero también de otros países de África y Asia. La región del Darién, frontera entre Panamá y Colombia, es el punto de entrada de una migración masiva que atraviesa los territorios ancestrales de pueblos indígenas que por siglos han conservado uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica. Sus sistemas de gobernanza territorial son esenciales para asegurar estrategias colaborativas de manejo de la migración que aseguren un trato digno y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Actores territoriales, movimientos sociales y sociedad civil

Con la apertura democrática de los años 90 florecieron nuevas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que representaban diferentes sectores - feminista, ambientalista, indígena, campesino, etc. - que buscaban impulsar reformas legales en pro de sus derechos más que la toma y transformación radical del Estado.

En este contexto ocurre una resignificación de los territorios como base de identidad y como punto de partida de esfuerzos para avanzar hacia una gobernanza inclusiva, sustentable y democrática.

La intensificación de conflictos socioambientales generó como respuesta una mayor organización entre **la población indígena, afrodescendiente y campesina, quienes se encuentran “en primera línea” de lucha**, protagonizando la defensa de sus derechos de acceso, uso y control sobre la tierra y otros recursos naturales. Estas luchas territoriales no solo se enfocan en la defensa de los medios de vida o de los recursos naturales, sino que suelen atender

diversas cuestiones de manera paralela pero integrada: luchan por derechos territoriales, ambientales, culturales, económicos, políticos, etc. En dicho proceso recuperan saberes tradicionales y ancestrales, y adquieren reconocimiento dentro de los movimientos sociales.

Además de los actores territoriales rurales “en primera línea”, la sociedad civil de la región incluye una amplia gama de actores organizados que buscan responder a las consecuencias negativas de la reducción del Estado. Con el objetivo de incidir en las decisiones de política pública y de mantener un diálogo con el Estado, las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron capacidades especializadas y un alto nivel de profesionalización. Sin embargo, mantener esta interlocución no ha sido posible debido a la incertidumbre, el cierre de espacios de participación y la implementación de medidas represivas.

Frente a esto, las organizaciones han adoptado diversas estrategias. Algunas han decidido vincularse con otros actores del mismo sector para posicionar conjuntamente su mensaje en la opinión pública. Otras organizaciones han optado por apoyar directamente a los actores territoriales en su defensa de los recursos naturales, de sus derechos e identidad. Estos apoyos se enfocan en diferentes ámbitos: la defensa del medio ambiente, derechos humanos, litigio, investigación, comunicaciones, asistencia técnica, formación y el fortalecimiento de capacidades.

Sin existir una vinculación directa por el momento, se identifican potenciales apoyos para los actores territoriales en organizaciones de periodismo, investigación, transparencia y combate a la corrupción, así como espacios más identitarios como la comunidad LGBTIQ+, de migrantes o movimientos urbanos por el derecho a la vivienda. La poca vinculación entre estos y los actores territoriales se explica por la especificidad de las agendas, pero también por el asedio selectivo de parte del Estado contra líderes y organizaciones. A pesar de ello, hay numerosas redes y coaliciones que forman puentes entre la sociedad civil.

Dinámicas y gobernanza en territorios de Centroamérica

Las tendencias observadas en la región son cada vez más complejas, se despliegan de manera distinta en los territorios dependiendo de la especificidad de los contextos locales, de la capacidad de los actores territoriales y de los sistemas de gobernanza. Por toda la región, diversos territorios y sus ecosistemas – desde áreas costeras, hasta zonas montañosas y de bosques – están siendo disputados y sometidos a severos procesos de degradación y exclusión; algunos ecosistemas representan los últimos remanentes de riqueza natural, incluyendo biodiversidad y reservorios de carbono, como en el caso de los bosques, pero también representan espacios donde comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan “en primera línea” diferentes dinámicas económicas como resultados de la expansión extractivista, de megaproyectos de infraestructura, del turismo inmobiliario o del accionar de actores ilícitos, como los del narcotráfico.

A continuación, se presenta una serie de casos territoriales que ejemplifican la diversidad y complejidad de dinámicas predominantes, así como las implicaciones para la gobernanza territorial.

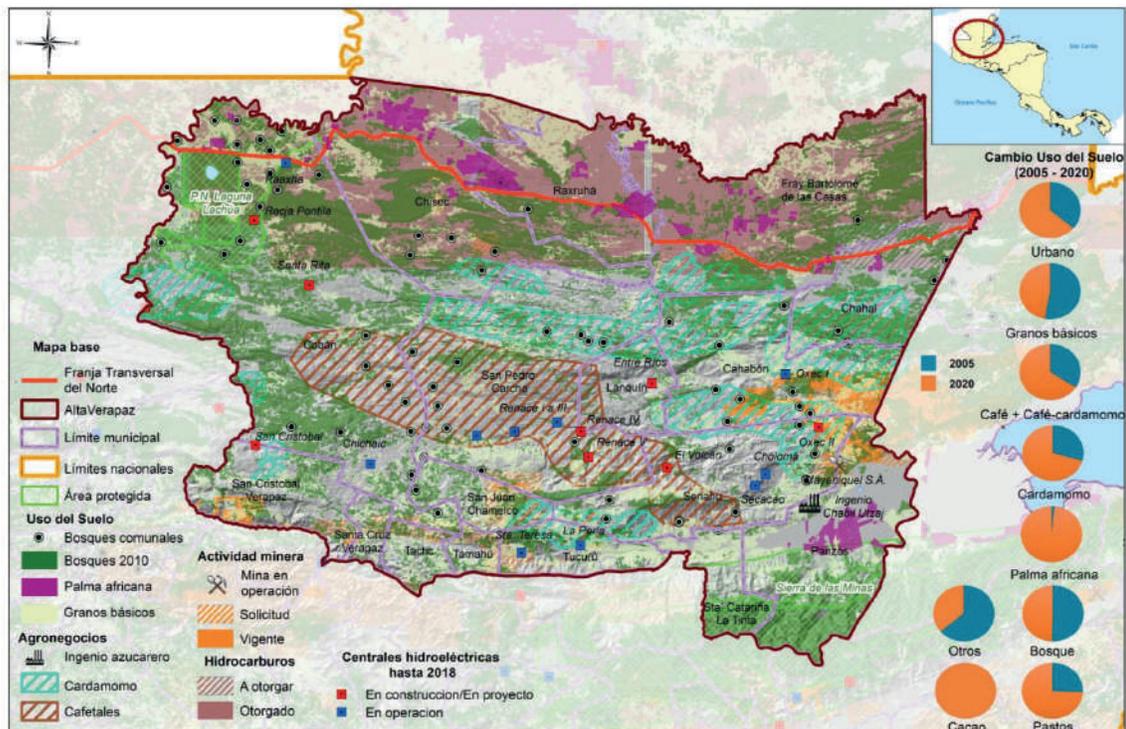
Alta Verapaz, Guatemala

Alta Verapaz es un departamento que se ubica al norte de Guatemala y está compuesto por 16 municipios. Es un territorio predominantemente rural, con mucha riqueza cultural y natural. El 90% de su población es indígena del pueblo Q'ueqchí. El departamento se caracteriza por una producción agrícola para el consumo familiar que convive con la producción de cultivos de exportación como el café, cardamomo y palma aceitera. Esta última ha tenido una acelerada expansión a través del despojo violento de tierras antes dedicadas a la agricultura familiar.

Alta Verapaz refleja temas críticos para la gobernanza en Centroamérica, los cuales se expresan en la serie de reivindicaciones de las organizaciones campesinas e indígenas por el derecho a la tierra, la naturaleza y la soberanía alimentaria frente a modelos que propician el despojo violento, la exclusión, la degradación y ahondan la vulnerabilidad social y ambiental, propiciando desplazamientos forzados y migraciones.

Enfrentar estas amenazas ha requerido de estrategias que fortalecen el tejido social territorial, la capacidad de defensa y la resiliencia de las organizaciones. Estas experiencias aportan lecciones para una gobernanza inclusiva y sustentable, en las que ha cobrado relevancia el liderazgo de mujeres indígenas, a pesar de no recibir apoyos suficientes. Esto supone el desafío de fortalecer y ampliar estos esfuerzos, propiciar el diálogo, estimular la reflexión compartida de las problemáticas e incentivar alianzas que permitan acciones coordinadas y adaptadas a las prioridades del territorio.

Dinámicas territoriales en Alta Verapaz, Guatemala



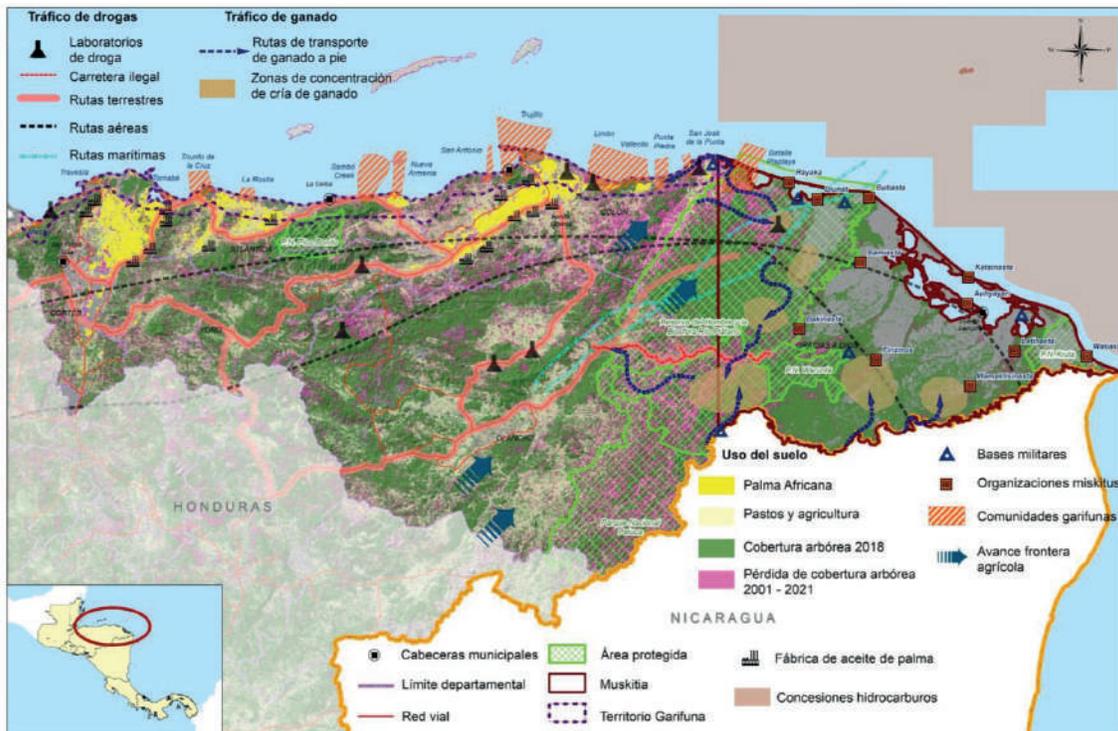
Litoral Atlántico y Muskitia Hondureña

A lo largo del litoral atlántico habita el pueblo Garífuna que aglutina a 48 comunidades. La Muskitia, representa cerca del 20% del territorio de Honduras y es el hogar de los pueblos Pech, Tawahka, Garífuna y Miskitu. En esta región la expansión de palma africana, los megaproyectos y diversas actividades ilícitas amenazan los derechos territoriales de los pueblos y comunidades locales. El aumento de actores ilícitos en el país se atribuye particularmente a la crisis por el golpe de Estado de 2009 y un marco legal nacional que promueve la comercialización y el acaparamiento de tierras comunitarias ancestrales.

En la Muskitia los gobiernos locales han facilitado la venta ilegal de tierras y la apertura de una “narco-carretera”. Esto ha generado conflictos entre las autoridades municipales y las autoridades territoriales por la gobernanza de los recursos. El despliegue de la militarización por parte del Estado también debilita los procesos de gobernanza de las comunidades que luchan contra estas invasiones. En consecuencia, los pueblos acuden a diversas estrategias incluyendo la migración forzada, particularmente en el Litoral Atlántico.

Los derechos colectivos han sido claves para la construcción de alternativas desde las comunidades. Sin embargo, la ausencia de voluntad política de parte del Estado para implementar estos derechos y enfrentar las diversas dinámicas excluyentes y violentas, sigue faltando en la práctica. Para defender sus derechos, los pueblos y comunidades requieren fortalecer y crear nuevas estrategias y alianzas para el futuro de sus territorios.

Dinámicas territoriales en el litoral atlántico y la Muskitia Hondureña



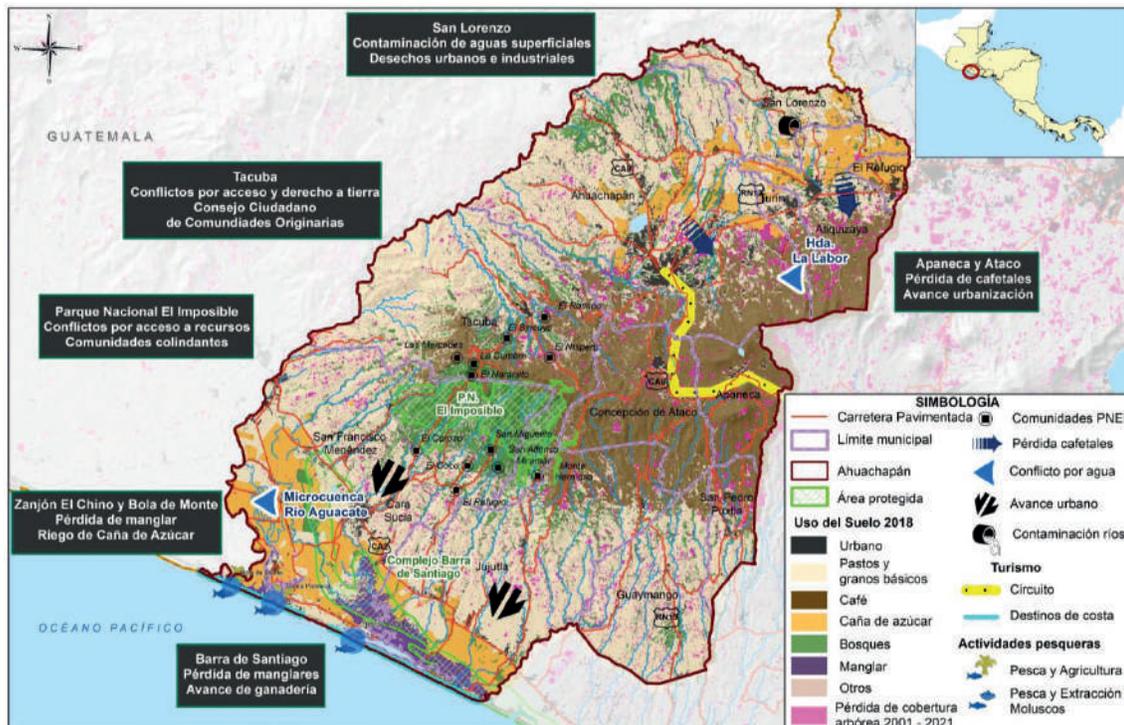


Ahuachapán, El Salvador

Este departamento se ubica en la zona occidental de El Salvador. Su economía ha estado siempre vinculada a la agricultura de exportación, antes con el café y ahora con la caña de azúcar. El peso de la agricultura ha sido desplazado por los servicios y el comercio. Las empresas inmobiliarias y grandes productoras de caña de azúcar, junto a los impactos del cambio climático, dificultan cada vez más el acceso a la tierra y el agua a las comunidades rurales del departamento, quienes dependen de sus parcelas de subsistencia. Los conflictos por el acceso a recursos también ocurren en los alrededores del bosque protegido más importante del país: el Parque Nacional El Imposible, en donde las comunidades no tienen claridad sobre el aprovechamiento de recursos que tienen permitido, debido a diversos cambios en las normativas y las restricciones que existen en el área protegida.

Frente a las disputas por los medios de vida, diferentes respuestas que apuestan por la gobernanza se articulan en diversos mecanismos de diálogo o coaliciones a varias escalas. Las comunidades locales e indígenas se han organizado para trabajar por la defensa de sus medios de vida, su identidad y su cultura, con nuevas prácticas agrícolas orientadas a la restauración, la conservación de sus paisajes y a la resiliencia climática. Algunas organizaciones de la sociedad civil apoyan estas iniciativas, incorporando la gobernanza como un eje transversal. Sin embargo, la falta de apoyo por parte de tomadores de decisiones y el escaso financiamiento de los gobiernos locales aumenta el riesgo de la duplicación de esfuerzos, desarticulación y finalmente el abandono de espacios.

Dinámicas territoriales en Ahuachapán, El Salvador

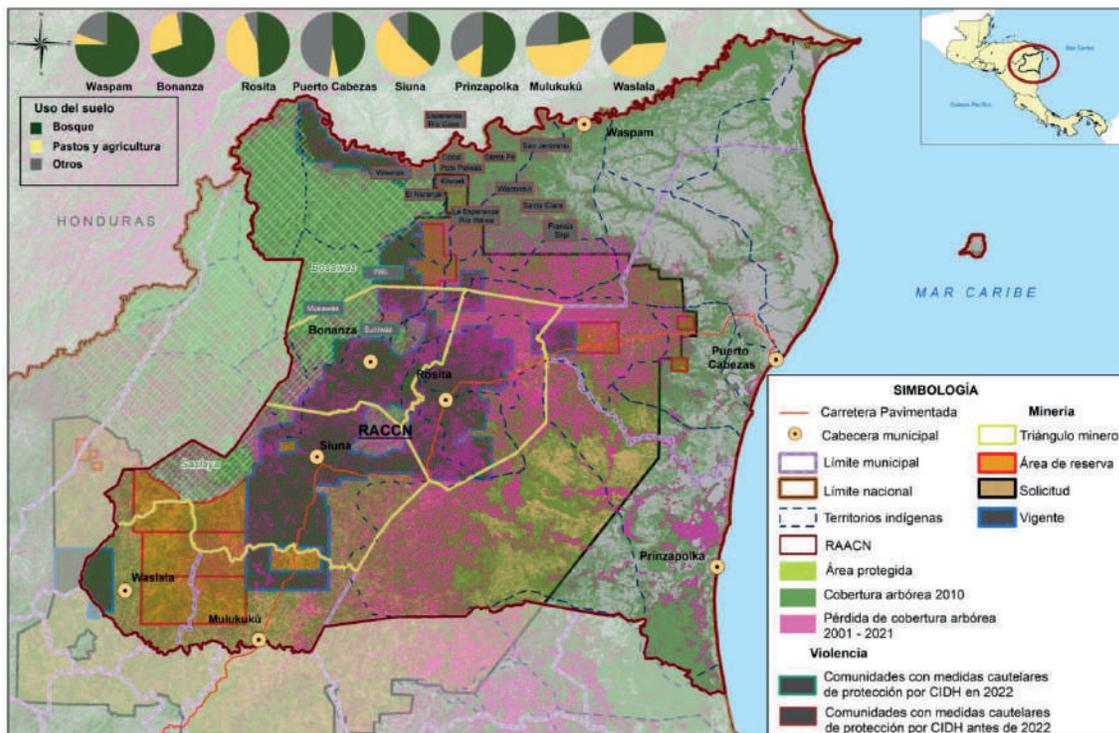


Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) abarca el 28% del territorio nacional y alberga el 32% de la cobertura arbórea, localizada principalmente en tierras que se reconocen como propiedad de los pueblos Miskitu, Sumu-Mayagna, Rama, Creoles y Garífunas. Estas tierras ancestrales se caracterizan por estar sometidas a fuertes presiones por parte de actores externos, que, a través de prácticas violentas, han configurado dinámicas de corte extractivista y degradantes de los recursos naturales. Entre estas actividades destacan la extracción minera y la deforestación. Con la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas en 2017, se colocó el 20% de la tierra de Nicaragua bajo concesión minera. Por otro lado, los principales motores de la pérdida de bosques son las concesiones para el aprovechamiento forestal y el auge ganadero, actividades que se apoyan en redes de tráfico de tierras para usurpar territorios en donde sólo los pueblos indígenas tienen derechos reconocidos.

A pesar de los avances del país en materia de institucionalización del régimen autonómico y el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de los pueblos nativos sobre la tierra, existe poca claridad en cuanto a las funciones de las autoridades territoriales y su articulación con otras entidades administrativas como las alcaldías de los municipios, el ejército o dependencias a nivel del ejecutivo. En este marco, el proceso autonómico excluye la extracción de recursos, rol que asume el gobierno central a favor de actores externos al territorio a través de incentivos y concesiones al sector privado y a la inversión extranjera directa.

Dinámicas territoriales en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua





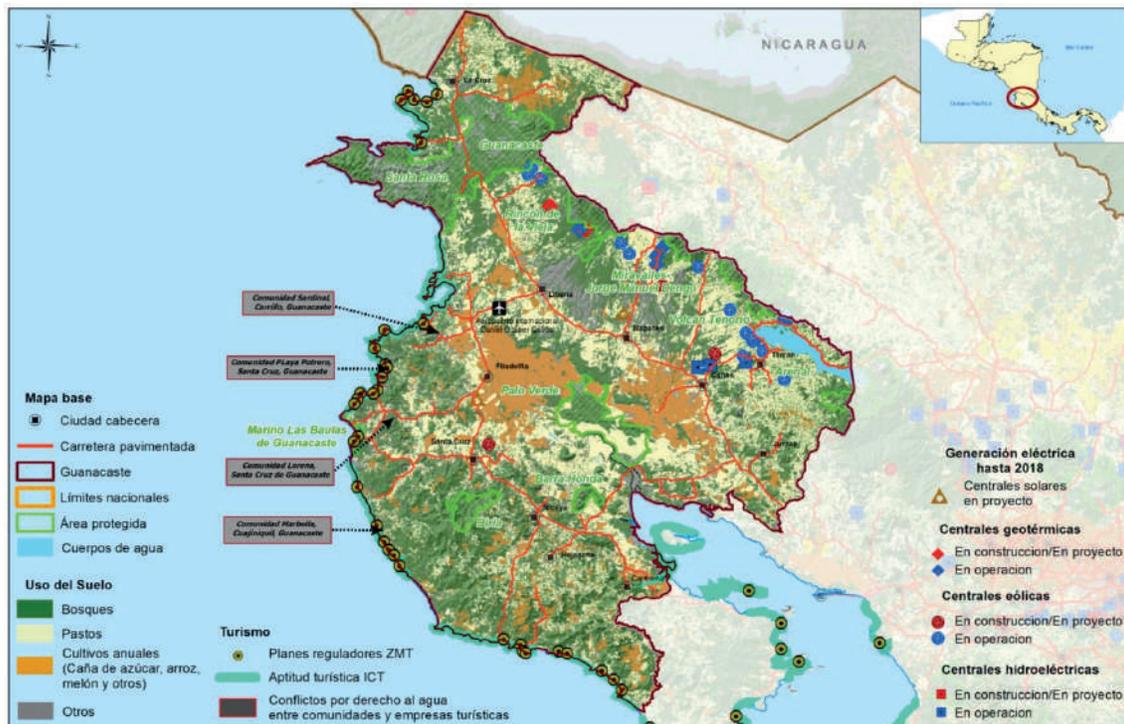
Guanacaste, Costa Rica

La provincia de Guanacaste de la región Chorotega se encuentra ubicada en el noroeste de Costa Rica. Luego de una transformación productiva, Guanacaste se ha orientado cada vez más al turismo y a los servicios. Dicho cambio estuvo acompañado de importantes inversiones públicas en infraestructura que no han logrado resolver las problemáticas de pobreza, desempleo y desigualdad.

En esta región, el agua ha sido el principal motivo de disputa y preocupación entre comunidades locales, grupos ambientalistas y el sector privado. La expansión de monocultivos -como la caña de azúcar, el arroz, el melón- y el despliegue del turismo inmobiliario, traen consigo la privación o escasez del agua y la degradación de los ecosistemas marítimos. El despliegue del turismo inmobiliario y los proyectos de grandes resorts conllevan preocupaciones por su desvinculación con los medios de vida locales. Su desarrollo ha significado la reorganización del espacio tradicionalmente rural, creando infraestructura que permita su expansión.

Existen en la actualidad mecanismos oficiales de participación ciudadana que abren a las organizaciones comunitarias de Guanacaste pequeñas ventanas de incidencia. El desafío para la gobernanza territorial es que se apropien de estos espacios y definan sus propios caminos de bienestar, incluyendo en ello el abordaje y negociación de conflictos. La atención a las desigualdades territoriales es otro elemento clave para la gobernanza, siendo importante la promoción de acciones efectivas para mejorar las condiciones de grupos vulnerables como los trabajadores migrantes y la población que habita áreas de riesgo y de vulnerabilidad socio ambiental.

Dinámicas territoriales en Guanacaste, Costa Rica





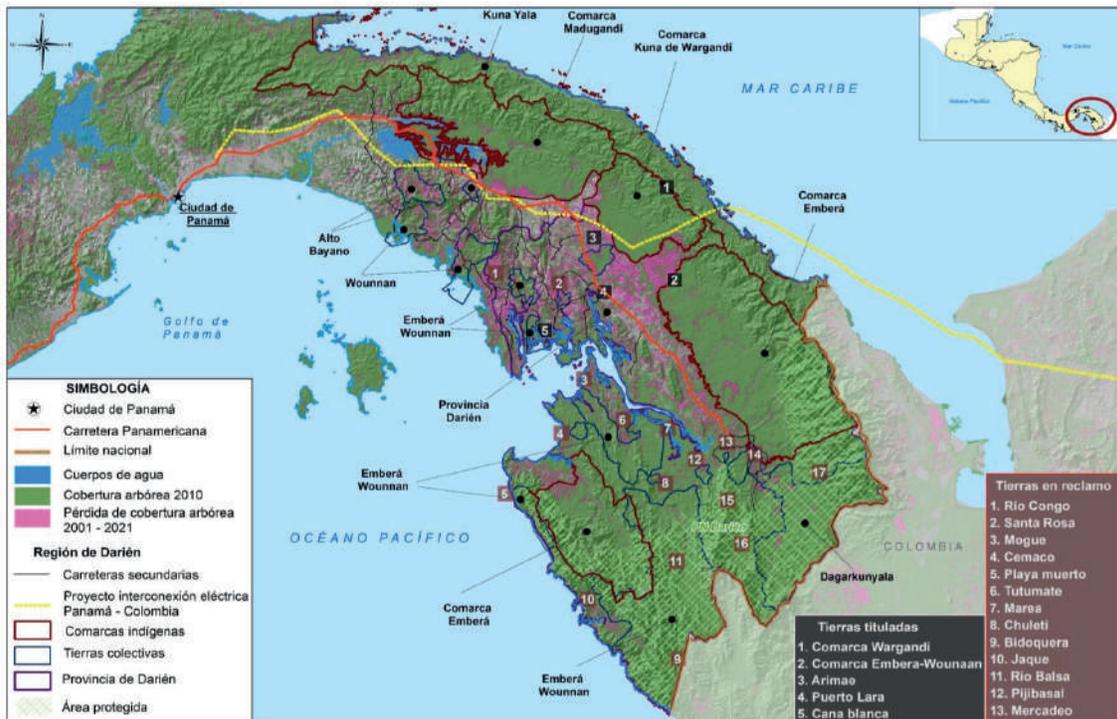
Región del Darién, Panamá

La región del Darién se encuentra al este de Panamá y está comprendida por la provincia de Darién y las comarcas indígenas Guna Yala y Emberá Wounaan. En esta región, las comarcas indígenas y las tierras colectivas gozan de cierta autonomía para regirse de acuerdo con sus costumbres e instituciones.

En la región del Darién se encuentra uno de los cinco grandes bosques de Centroamérica, considerado también como uno de los bosques más ricos en carbono del trópico, convirtiéndola en una zona clave para la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Este territorio se ve amenazado por diversas actividades ilícitas como la tala ilegal, a la que se atribuye el 90% de la pérdida forestal de los últimos 10 años. Sin embargo, se ha identificado que la tasa de pérdida de cobertura arbórea es menor en las zonas donde los pueblos indígenas tienen derechos territoriales reconocidos.

El “tapón del Darién” es el punto de entrada a Mesoamérica por el que cerca de 250,000 personas atravesaron la frontera entre Colombia y Panamá en el año 2022. La atención de esta crisis migratoria carece de un abordaje territorial. El rol de las autoridades indígenas suele ser invisibilizado o, en el peor de los casos, son criminalizadas, acusándolas de ser partícipes del tráfico de personas. En gran medida, las autoridades territoriales están lidiando, con escaso apoyo, con la presencia de miles de personas en condiciones precarias y vulnerables. El fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza representa una oportunidad para un abordaje distinto, que podría dar respuesta a problemáticas sociales, ambientales y de salud a partir de soluciones propuestas e implementadas por las autoridades indígenas.

Dinámicas territoriales en la región del Darién, Panamá



Implicaciones para una agenda de apoyo estratégico de la sociedad civil a los actores territoriales

Las comunidades rurales campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes de la región enfrentan amenazas contra sus tierras, sus medios de vida y sus derechos como nunca antes se había visto, con excepción de las condiciones de guerra. La sola decisión de querer vivir una vida digna en sus territorios y de mantener sus derechos a los recursos naturales se ha convertido en una opción extremadamente peligrosa.

Los territorios y sus organizaciones están “en primera línea” de asedio de parte de actores estatales, económicos (nacionales y transnacionales) y de agrupaciones del crimen organizado. Pero al mismo tiempo, los territorios y sus organizaciones **también representan una de “las últimas fronteras” fundamentales para la gobernanza y la resiliencia.** Si bien es en los territorios rurales donde se encuentran los recursos naturales y donde se generan servicios ecosistémicos clave para la resiliencia, son los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales, en la medida que mantienen su capacidad para decidir sobre los recursos naturales, sus medios de vida y sus formas de organización, los que están construyendo sistemas de gobernanza local y territorial capaces de poner estos recursos naturales y servicios ecosistémicos en función de la resiliencia de sus comunidades y de las sociedades en general.

Los desafíos que imponen estas dinámicas en la región son de tal magnitud y complejidad, que ningún actor territorial, comunidad rural o autoridad indígena puede enfrentarlas sola. Los contextos de violencia, corrupción, impunidad y erosión del Estado de Derecho tensionan y destruyen los sistemas de gobernanza territorial, perdiéndose capacidades clave para impulsar – por ejemplo – el escalamiento de prácticas de manejo sustentable de recursos naturales. De allí la importancia de construir resiliencia basada en la defensa de derechos humanos de primera generación (derecho a la vida, derechos políticos y civiles) así como los derechos de segunda y tercera generación (derechos socioeconómicos, culturales, territoriales y autodeterminación).

Las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un rol clave fortaleciendo la voz y poder de actores locales y territoriales si reconocen la complementariedad de sus objetivos, si coordinan esfuerzos para lograr sinergias a largo plazo y si logran articular narrativas convincentes y de esperanza frente a un contexto sumamente adverso. Un esfuerzo concertado dentro y entre distintos ámbitos de trabajo permitiría **co-construir una agenda compartida** que contribuya a fortalecer la cohesión social y que consolide estratégicamente sus conocimientos, capacidades e impacto colectivo. Al mismo tiempo, esto supone la necesidad de vincular de manera más estratégica esferas de trabajo de la sociedad civil históricamente separadas.

Este tipo de colaboraciones, en la medida que contribuyen a construir lazos de confianza y de trabajo, también resultan ser una de las vías más importantes para canalizar un poder social que pueda enfrentar las dinámicas que amenazan las bases de la gobernanza democrática y sustentable en los territorios de Centroamérica.



REVALORIZANDO COMUNIDADES Y TERRITORIOS

 prisma.org.sv  [@PrismaRegional](https://www.facebook.com/PrismaRegional)  [@prisma_org](https://twitter.com/prisma_org)

Para acceder a la versión completa del Informe “Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica: Territorios y actores en la encrucijada” ingresa a:

<https://bit.ly/GobernanzaCA>